

25ª SESION ORDINARIA DEL 19 DE JULIO DE 1858

Presidencia del Sr. Luque

PRESIDENTE

ARAOZ

SORIA

COMAS

RODRIGUEZ

CARZON

GRAZ

DIAZ RODRIGUEZ

GORDILLO (D. J.)

POSSE (D. JUSTINIANO)

OCAMPO

DURAN

LOPEZ (D. RICARDO)

LUCERO (D. C.)

FERREIRA

COLODRERO

ZUVIRIA

GONZALEZ

QUESADA

WARCALDE

CHENAUT

FUNES

POSSE (D. F.)

NAVARRO (D. R. G.)

LOPEZ (D. TIBURCIO)

FUNES

DARACT

GORDILLO (D. V.)

VICTORICA

GARCIA

Gobierno y los actuales empresarios del «Nacional Argentino» tenía el honor de incluirlo en copia legalizada.

Pasaron estos documentos á la Comision

En el Paraná, Capital Provisoria de la Confederacion Argentina, á diez y nueve dias del mes de Julio de 1858, reunidos en su Sala de sesiones los señores Diputados anotados al margen, con inasistencia de los señores Feijoo y Condarco con aviso, Gutierrez, Valle y Alvear sin él, el señor Presidente declaró abierta la sesion y fué aprobada el acta de la sesion del día 12 del corriente.

Se leyó un mensaje del Excmo. señor Presidente de la Confederacion, en que exponía, que habiendo la Comision de Hacienda de la Honorable Cámara solicitado de su Ministro Secretario de Estado en el Departamento del Interior, un conocimiento del contrato celebrado por el

de Hacienda. Leyóse tambien el dictámen de la Comision de Hacienda aconsejando la aprobacion, con algunas modificaciones, del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en que se le autoriza para gastar hasta la cantidad de 54.000 pesos anuales para subvencionar por el término de cinco años algunas líneas de navegacion á vapor.

Leyóse además el dictámen de la Comision de Guerra aconsejando se aprobase el proyecto pasado en revision por el Honorable Senado, en que se dispone se erija una estatua ecuestre en representacion y á la memoria del Brigadier General D. José de San Martin.

Despues de esto el señor Ocampo hizo mocion para que se tratase con preferencia en la órden del dia del proyecto presentado por la Comision de Hacienda en que se autoriza al Poder Ejecutivo para gastar hasta la suma de 54.000 pesos anuales para subvencionar, por el término de cinco años, algunas líneas de navegacion á vapor, fundándola en que éste era un negocio de suma importancia para el país por los bienes que debía reportar de la realizacion de ese pensamiento y que importaría mucho para obtener pronto aquellos; que la aceptacion por parte del Gobierno de las propuestas hechas por los empresarios de Rio Janeiro, pudiera comunicarse á éstos por el próximo paquete, porque de lo contrario, se retardaría por dos ó tres meses más la realizacion de un pensamiento tan útil para el país.

Que como la resolucion en este asunto era tan sencilla, pues solo se trataba de acordar

era por esto que deseaba se aprobase cuanto antes el proyecto.

El señor Posse (don Justiniano): Que la consideraciones emitidas por el señor Ministro no le parecían bastantes para falsear un principio de buena administración, que el Gobierno debía poner siempre en práctica para salvar su responsabilidad; porque podía haber casos en que todas las ventajas posibles no serían bastantes para librarlo de la consideración de que acaso había celebrado un contrato sin llamar á propuestas, cediendo á influencias ó relaciones personales.

El señor Ministro: Que la simple lectura del contrato bastaba para probar que no había favoritismo y que el Gobierno había cuidado mucho de salvar su responsabilidad, como cuidaba siempre. Que el Ejecutivo estaba seguro de que ese contrato no podía ser más ventajoso y era por esto que había escusado á llamar á propuestas. Que por lo demás este era un acto puramente administrativo, porque aunque el Congreso tuviera el derecho de disponer por medio de un decreto que se llame á propuestas, no se deducía de ahí la obligación de que el Ejecutivo llamase á propuestas, siempre que tratase de celebrar un contrato.

El señor Quesada: Que en atención á la importancia de este negocio y á su especialidad, y á las razones expuestas por el señor Ministro, creía que no debía exigirse que se llamase á propuestas, puesto que ya se había declarado que este contrato costaba muy barato á la Nación, y que era muy probable que no se presentasen propuestas más ventajosas.

Después de esto, no tomando la palabra ningún señor Diputado, se sometió á votación el proyecto en general, y resultaron veinte y cinco votos por la afirmativa y dos por la negativa.

Se puso en discusión el artículo 1º.

El señor Navarro espuso: Que puesto que la mente de la Comisión era que el Poder Ejecutivo hiciese este contrato por un término más corto del que se designaba en el artículo en discusión, debía fijarse un término, porque no había objeto en fijar el de cinco años cuando el contrato debía ser por menos tiempo.

El señor Araoz: Que el señor Ministro había transmitido á la Comisión que segun las proposiciones hechas por el Gerente de la Empresa de Río Janeiro que se hallaba en esta Capital, no podía hacerse el contrato indicado sino por el término de cinco años. Que él (el señor Ministro) había hecho todo esfuerzo por disminuir ese término, pero que no le había sido posible conseguirlo aun. Que á pesar de esto, creía que tal vez podría obtenerlo después de sancionada la ley. Que por consiguiente, la Comisión juzgaba que debía fijarse

en la ley el término de cinco años, para no exponerse á hacer imposible el contrato si no se obtenía aquella condición, y por eso se deducía el artículo 2º del proyecto á recomendar al Poder Ejecutivo que procurase contratar con los empresarios por un término menor que el señalado en el 1º.

Después de esto, no tomando la palabra ningún señor Diputado, se sometió á votación el artículo 1º y fué aprobado por veinte y cinco votos contra dos.

Puesto en discusión el artículo 2º no se hizo observación á él y fué igualmente aprobado. Siendo el 3º de forma se dió por aprobado.

El señor Ocampo espuso: Que desearía que el señor Presidente ordenase se pasase este proyecto inmediatamente á la Honorable Cámara de Senadores, pues le constaba que, ésta reconociendo la urgencia de su despacho, lo esperaba para considerarlo en la sesión presente.

El señor Presidente: Que había ya ordenado se pasase inmediatamente dicho proyecto.

Se puso en discusión el artículo 13 del proyecto de ley de Justicia Federal:

Artículo 13. La Corte Suprema nombrará su Presidente por el tiempo y segun lo establezca su reglamento interior.

No haciéndose observación á este artículo se votó y fué aprobado por unanimidad.

Se puso en discusión el artículo 14; su tenor es el siguiente:

Artículo 14. Corresponde á la Suprema Corte de Justicia originaria y exclusivamente el conocimiento y decisión de las causas concernientes á Embajadores, Ministros y Cónsules extranjeros; en las que una Provincia fuese parte, y en los conflictos entre los poderes públicos de una misma provincia.

El señor Gonzalez dijo: Deseo saber si en las causas espresadas en el artículo que se discute se acuerda á los litigantes el recurso de súplica; porque si el fallo de la Suprema Corte en esas causas importantes en que conoce originariamente, es irrevocable y sin apelación, no acordándose aquel recurso, se obraría contra el principio de derecho que mientras más importante es una causa, más deben ser las instancias.

El señor Funes: Desearía que el señor Diputado se fijara en que en este artículo solo se trata de establecer á qué Tribunal corresponde juzgar en última instancia y originariamente de las causas que se espresan en él; pero pueden empezar en los Tribunales inferiores y segun su gravedad venir hasta la Suprema Corte. Pero no es este el lugar oportuno

para detallar el procedimiento de los asuntos, porque eso debe hacerse después y en un artículo por separado.

El señor García: Estoy conforme con las ideas emitidas por un señor Diputado por Mendoza y en oposición á lo espuesto por el miembro informante. Creo, pues, que ya que se trata de este artículo, debe expresarse en él si hay lugar ó no al recurso de súplica. En este concepto propondría un artículo en lugar del que se discute, para que en los casos á que este se refiere, la Suprema Corte se divida en dos Salas, para que la una haga de Tribunal de 1ª instancia y la otra conozca en el recurso de súplica.

El señor Ministro y el señor Funes observaron que era inoportuna la modificación que proponía el señor Diputado, habiéndose sancionado ya el artículo 12 del proyecto.

El señor Quesada: Creo que sería oportuno hacer en este artículo alguna modificación, para que no se comprenda que en estas causas tan importantes en que se trata nada menos que de los derechos de la Confederación con respecto á los Embajadores, Ministros y Cónsules extranjeros, un solo Tribunal conozca en 1ª y última instancia, sin que haya lugar á súplica. Debe, pues, modificarse este artículo, así no será necesario explicar después la primera parte del artículo 17 que dice: «Los fallos de la Suprema Corte de Justicia son irrevocables y sin apelación.»

El señor Funes: Creo por el contrario, que en el artículo 17 es la oportunidad de hablar de la 2ª instancia, y no en el que se discute, que debe expresar únicamente cual es el Tribunal que deba conocer en 1ª instancia.

El señor Quesada: Descarta escuchar la opinión del señor Ministro sobre este punto.

El señor Ministro de Justicia: ¿Duda el señor Diputado que pueda haber súplica en estos casos?

El señor Quesada: El artículo 17 de este proyecto declara que los fallos de la Suprema Corte son irrevocables y sin apelación. Parece, por consiguiente, que en las causas expresadas en el artículo que se discute, no puede haber mas que una sentencia.

El señor Ministro: Pero el señor Diputado debe tener presente, que en los casos de súplica no se revocan las sentencias ni hay apelación tampoco. Por consiguiente, aunque de los fallos de la Suprema Corte haya lugar al recurso de súplica, siempre queda terminante el principio de que los fallos de ese Tribunal son irrevocables y sin apelación. Por esto, señor, debe quedar librado al Reglamento de procedimientos que se dé la Suprema Corte.

Respecto de las dos Salas que propone otro señor Diputado, creo también que eso no

puede tener lugar después de aprobado el artículo 12 que establece un Tribunal compuesto de nueve Jueces. Creo, pues, que este artículo debe quedar tal como está, y dejar á la Suprema Corte la facultad de admitir en los casos que ocurran el recurso de súplica, si lo cree conveniente.

El señor Quesada: Puesto que la mente de la Comisión y del señor Ministro es que la Corte Suprema reglamente este punto, no tengo inconveniente en que se apruebe el artículo tal como está, con tal que consten en el acta las palabras del señor Ministro.

Sometido á votación el artículo 14 fué aprobado por unanimidad.

Se puso en discusión el artículo 15; su tenor es el siguiente:

Art. 15. Corresponde á la Suprema Corte de Justicia en grado de apelación ó enmienda, las demás causas de la Jurisdicción Federal que viniesen ante ella de los Tribunales inferiores federales, conforme al orden establecido en esta ley y las que vengan de los Tribunales Superiores de Provincia.

El señor Quesada: La Cámara ha aceptado como principio la jurisdicción concurrente de los Tribunales de la Administración de Justicia de Provincia y los Tribunales Federales, es decir, que de las sentencias pronunciadas por los primeros puedan conocer en grado de apelación los últimos; pero como he estado en oposición con esta atribución, que considero atentatoria á la soberanía provincial, votaré en contra del artículo que se discute, porque él confirma aquella prescripción. Como antes no espuse mis ideas, considero digno de llamar la atención de la Cámara sobre la naturaleza de esta jurisdicción concurrente, y me permitirá hacer algunas ligeras reflexiones. Dos soberanías coexisten en los Gobiernos federativos: la soberanía local ó provincial, que es la regla, y la soberanía federal ó nacional, que es la excepción. Es decir que en aquello no delegado espresamente por la Constitución, las Provincias conservan su soberanía perfecta. El problema, pues, se reduce á armonizar estas dos soberanías, que cada una obre en su esfera, sin invadir el dominio privativo de la otra. Las Provincias conservan todo el poder no delegado espresamente en la Constitución Nacional; deben dictar sus propias Constituciones bajo el sistema representativo republicano; organizar por lo tanto tres poderes soberanos é independientes entre sí, legislativo, ejecutivo y judicial, poderes cuyo único límite es la parte delegada á la Nación; en lo demás son soberanos. No podemos dictar una ley orgánica que falsee estos principios, que invada las atribuciones privativas de uno de los tres altos poderes provinciales,

porque se destruye esa soberanía local, desde que se concede apelacion para ante los Tribunales Federales, de las sentencias pronunciadas en última instancia por los Tribunales Superiores de Provincia: ya no hay Poder Judicial local, soberano, puesto que otro poder puede revocar sus fallos, puede inquirir sus procedimientos, y por lo tanto, depende directamente de los Tribunales Federales. Por esta ley se trunca la soberanía de Provincia, se centraliza la Administracion de Justicia, y los Tribunales ordinarios de Provincia no son sino diversas instancias de un Poder Judicial central, único cuyos fallos serán irrevocables por esta ley. Pero tal prescripcion viola el principio federativo, invade las prerogativas provinciales, y falsea la naturaleza de nuestra organizacion política.

Supongamos que la sentencia pronunciada en un Tribunal de Justicia provincial, forme cosa juzgada, ¿qué derecho hay de que un Tribunal Federal pueda revocar esa sentencia, y destruir la fuerza legal de la cosa juzgada? ¿No ejerce ese Tribunal provincial una atribucion privativa, soberana, que nadie puede negarle? Pues bien, ya las sentencias de los Tribunales de Provincia carecen de esa importancia; la sentencia que va á decidir de los derechos privados en casos contenciosos, es la que pronuncia un Tribunal Federal; la soberanía provincial desaparece entonces para ser absorbida por un Poder Judicial central, bajo el mentido nombre de Justicia Federal. Esta ley, pues, en la parte que concede esa jurisdiccion concurrente á los Tribunales Federales y los provinciales, es inconstitucional.

Cuando el Congreso dicta los códigos civil, criminal, mercantil y de procedimientos, que serán leyes nacionales, desaparecen *ipso facto* los Tribunales de Justicia de Provincia. Solo los Tribunales Federales conocen de las causas regidas por leyes nacionales: luego ellos solos ejercerán entonces la Administracion de Justicia en toda la República; porque los Tribunales de Provincia no pueden conocer y resolver casos regidos por leyes nacionales. El Poder Judicial de Provincia quedará borrado el día que se sancionen los códigos, para centralizar mas todavía los Tribunales Federales, que se convertirán en Tribunales ordinarios de Justicia y en Tribunales políticos.

El rol de las Legislaturas de Provincia quedará reducido tambien al de simples municipalidades, sus leyes serán los impuestos que paga la localidad; y por este medio borramos el principio federativo, base de nuestra organizacion, sustituyendo el gobierno central y unitario.

Por estos fundamentos he de votar contra el artículo que se discute en la parte que concede apelacion para ante los Tribunales Fe-

derales de las sentencias de los Tribunales de Provincia.

El señor Funes: Creo que son completamente inútiles las observaciones que acaba de hacer el señor Diputado preopinante; porque si se fija con alguna detencion en el artículo, comprenderá que se refiere solamente á las causas de la jurisdiccion federal, en las cuales el Tribunal de Provincia solo debe juzgar en 1ª instancia, sin que esto sea un inconveniente para que aquellas puedan llevarse hasta la Suprema Corte que es el Tribunal mas alto. Si se fija, pues, el señor Diputado en el artículo observará que la Justicia Federal solo conocerá en los casos en que haya apelacion; porque si el Reglamento de procedimientos de la Justicia Federal dice, en tales casos no hay apelacion, no habrá.

El señor Quesada: A estar por las esplicaciones que acaba de dar el señor Diputado informante, se comprendería, que los Tribunales de Provincia juzgan alguna vez en causas del fuero federal. Pero son completamente distintas las dos Justicias: cada una tiene su jurisdiccion propia, que le es privativa, aun en la hipótesis que se haya sancionado que alguna vez aquella juzga en concurrencia con esta; sancion á que me opondré siempre, señor, porque la soberanía de Provincia, va á quedar absorbida por la Nacional, en cuanto se refiere al Poder Judicial. Mucho mas cuando el Congreso dicte los códigos; porque mal podría haber causas que perteneciesen á la Justicia de Provincia, cuando todas las leyes que rijan las relaciones privadas, la propiedad, la familia, etc, habrán sido dictadas por una autoridad nacional, y por lo tanto, los casos regidos por ellas, serán resueltos por Tribunales Federales. No habrá causas del fuero provincial, y por lo tanto, no habrá Tribunales provinciales. Por consiguiente, vamos á crear en la Justicia Federal un poder completamente unitario, despojando á la de Provincia de todas sus atribuciones privativas y dejándola reducida á la nulidad. No es esto lo que la Constitucion ha hecho, señor: lo hacemos nosotros que al reglamentar los principios de aquella, invadimos la soberanía provincial, absorbemos sus derechos, violamos sus prerogativas. La Constitucion reconoce una Justicia Provincial que debe obrar en la esfera de las facultades no delegadas á la Nacion; como reconoce una Justicia Nacional, cuyas atribuciones marcan perfectamente la Constitucion, única base que debe servirnos para legislar.

El señor Garzon: Este artículo no tiene otro objeto que aumentar una instancia mas en las causas que actualmente concluyen ante los Tribunales superiores de Provincia; de manera que, todas las sentencias de aquellos, puedan ser revocadas por la Junta Federal cuan-

do se oponen á la Constitución ó las leyes. Por lo demás no debe extrañarse que la misma autoridad que tiene atribucion para dictar los Códigos Federales, la tenga tambien para aumentar una instancia mas á las causas que se inician ante los Tribunales de Provincia, no para absorber la soberanía Provincial, como se cree equivocadamente en mi concepto, sino para garantir mejor al ciudadano el libre ejercicio de sus derechos, dejándole la facultad de apelar de los Tribunales de Provincia y ofreciéndole así todas las garantías posibles de acierto é imparcialidad.

El señor Ferreyra: Sin embargo de que lo que se ha dicho ya es bastante para comprenderla conveniencia de sancionar la disposicion contenida en el artículo que se discute, contestaré á la observacion que se ha hecho bajo la falsa suposicion de que se restringe la esfera de las funciones que corresponden á la Justicia Provincial, por cuanto se admite en ciertos asuntos la concurrencia de la Federal en grado de apelacion ó enmienda. Creo que este argumento prueba mas bien lo contrario de todo lo que se ha intentado probar, y digo, señor, que de él se deduce todo lo contrario, porque se ensancha en vez de coartarse la jurisdiccion provincial; puesto que correspondiendo por disposicion espresa del código fundamental á la Justicia Federal el conocimiento de las mismas causas en 1ª instancia, como otra vez he tenido el honor de hacerlo presente á la Honorable Cámara, se limita en esta parte la atencion de sus atribuciones admitiendo la concurrencia solo en 2ª instancia por apelacion ó enmienda. Hay mas, por esta disposicion se aumenta una instancia estableciendo cuatro en lugar de ser tres, como sucedería en caso de admitir la concurrencia en 1ª instancia, y en esto no se ha consultado otra cosa que ofrecer una mayor garantía en favor de los derechos de los ciudadanos argentinos.

Por otra parte, la ley sería imperfecta porque no correspondería al fin que se tenía en dictarla, si constituyésemos á los Tribunales de Provincia en intérpretes de la Constitución y leyes nacionales: atribucion que no puede separarse de la Justicia Nacional porque la Carta se la concede exclusivamente, determinando por el artículo 97 *que le corresponde el conocimiento y decision de todas las causas que se versen sobre puntos regidos por ella y las leyes nacionales*, únicos casos en que puede ser concurrente la Provincial, puesto que en los demás conoce originariamente la Federal.

No sé, señores, de que principio pueda deducirse que cuando se dicten por el Congreso los Códigos Nacionales se anulará la Justicia Provincial. Por el contrario, yo juzgo que

entonces recibirá toda la amplitud de que pueda ser capaz, es decir, toda la estension de la jurisdiccion no delegada á la Federal, porque estos deslindarán mejor sus atribuciones determinando los casos en que deba conocer exclusivamente. Y como es natural suponer, la órbita de su accion abrazará siempre el inmenso cúmulo de las contenciones particulares que se versen sobre el derecho privado.

Estará, pues, mas favorecida la Justicia de Provincia porque al conocimiento de las causas pertenecientes al derecho meramente civil, esta ley le da la jurisdiccion originaria en todos los asuntos regido por las leyes nacionales, reduciendo la concurrencia de la Federal á solo la 2ª instancia; de suerte que en vez de ser aquella la menoscabada es ésta la que resulta notablemente restringida.

El señor Quesada: Por el artículo 11 ya sancionado que dice terminantemente «que la accion de la Justicia Federal es estensiva á las atribuciones del Poder Legislativo, de suerte que en cuanto este puede legislar podrá juzgar aquella,» se deduce bien claramente que una vez dictados los códigos por el Congreso, solo los Tribunales Federales pueden administrar justicia, porque solo ellos pueden conocer y resolver en los casos regidos por leyes de la Nación, y entonces la Justicia Provincial desaparece. Creo, pues, que no debe admitirse esa jurisdiccion concurrente, porque esta jurisdiccion no nace de las disposiciones constitucionales. El Congreso no tiene tal facultad, legisla usurpando la soberanía local.

El señor Funes: Como un señor Diputado ha contestado satisfactoriamente el argumento de que se restringe la Justicia Provincial en este artículo, probando que se ensancha la esfera en que aquella debe funcionar en vez de usurparse sus atribuciones, me limitaré á contestar el argumento que acaba de hacer el que me ha precedido, fundándose en el artículo 11 ya sancionado, y deduciendo de él que desaparece completamente la soberanía provincial.

El señor Diputado debe observar, que hasta donde se extiendan las atribuciones del Poder Legislativo, deben crearse en igualdad exacta las del Judicial que es el encargado de aplicar las leyes dictadas por aquel; y por el contrario, si se restringen las atribuciones de este, sería preciso restringir tambien las del Poder Legislativo, lo cual es imposible, puesto que le han sido acordadas por la Constitución.

El señor Ministro de Justicia: Sin embargo de que esta discusion se ha tocado ya cuando se trató de la jurisdiccion concurrente de la Justicia Federal y de la Provincial; como la materia es grave, tal vez es necesario repetir algunas observaciones de las que se hicieron entonces para mayor claridad.

Un señor Diputado por Corrientes acepta la coexistencia de dos soberanías, la de Provincia que es la regla y la Nacional que es la escepcion, y que no puede ser disminuida por aquella: bajo esta base se ha dicho que la Constitucion y las leyes del Congreso son la suprema ley; y que las autoridades de Provincia deben someterse á las leyes de la Nacion. Por consiguiente, hemos aceptado una soberanía superior á la otra, y no puede el señor Diputado pretender que los poderes de Provincia invistan una soberanía tan grande que pueda anular las leyes de la Confederacion y la Constitucion. Véase, pues, como el señor Diputado á quien contesto, en el propósito de probar que la soberanía de Provincia es absorbida por la Nacional ha demostrado todo lo contrario: que esta será absorbida por la de Provincia si le concedemos la facultad de aplicar las leyes de la Confederacion de un modo que sus fallos no pudieran recibir enmienda de la Justicia Federal. Debe tener presente, pues, el señor Diputado, que nuestro principal interés debe ser mantener el equilibrio de los poderes creados por la Carta, y que si un poder inferior, aunque soberano en la Provincia pudiese anular la ley nacional, podría tambien conservar el derecho de tránsito, por ejemplo, la esclavitud, la pena de azotes que están terminantemente prohibidas por la Constitucion. ¿Esto es entonces lo que el señor Diputado cree que prescribe la Constitucion cuando afirma que la soberanía de Provincia va á ser absorbida por la Nacional? Fijese, pues, el señor Diputado que el artículo dice que corresponden á la Suprema Corte en grado de apelacion ó enmienda las demás causas de la *Jurisdicción Federal*, las que no le pertenecen originaria y exclusivamente, que vengan ante ella de los Tribunales inferiores Federales, y de los *Tribunales Superiores de Provincia*: es decir, aquellas causas en que la Justicia Federal debe entender en 2ª instancia protegiendo las leyes nacionales. Esos son, señor, las únicas causas que pueden venir en grado de apelacion ó enmienda á la Suprema Corte. Esto con respecto á manifestar que esta centralizacion de la Justicia Federal que se hace en la Suprema Corte en nada perjudica á la soberanía de Provincia ni la invade, porque en virtud de la Constitucion aquella no puede pretender anular las leyes del Congreso. Por consiguiente, cuando una soberanía de Provincia tuviese la pretension de entenderse mas allá de las facultades que le acuerda la Constitucion, debe haber un poder que corrija esas pretensiones, y este es el objeto del artículo que se discute.

Con respecto á lo que ha dicho otro señor Diputado, que esta facultad que se da á la Justicia de Provincia para aplicar las leyes nacio-

nales absorbe las atribuciones de la Justicia Federal, yo no encuentro exacta esta indicacion ni peligrosa aquella facultad, porque el artículo 31 de la Constitucion dice terminantemente «que esta Constitucion, las leyes de la Confederacion que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nacion; y las autoridades de cada Provincia están obligadas á conformarse á ella, no obstante cualquiera disposicion en contrario que contengan las leyes ó Constituciones Provinciales.» Por consiguiente, los Jueces de Provincia pueden y deben aplicar las leyes de la Nacion, salvo aquellas que pertenecen á la jurisdiccion originaria y esclusiva de la Suprema Corte, desde que sus fallos serán anulados ó reformados por la Justicia Federal cuando estén en contradiccion á la Constitucion ó á las leyes nacionales.

Se ha dicho tambien que los códigos que dicte el Congreso aumentarán la supremacía de la Justicia Federal. Pero, señor, eso es suponer que los códigos federales serán como los que rigen hoy; es suponer que esos códigos nieguen á las Provincias la soberanía que tienen por la Constitucion. Debe creerse, por el contrario, que dejen á las soberanías de Provincia la facultad de dictar leyes sobre tales casos, y hasta cierto punto, porque esos códigos, señor, deben dictarse con arreglo á los principios establecidos por la Constitucion.

El señor Quesada: Que los códigos no podian arreglar otra cosa que materias del derecho civil, es decir, las relaciones de hombre á hombre, y no las soberanías de Provincia, porque eso pertenecia al derecho constitucional: y el señor Diputado adujo algunas observaciones esplanando las que habia emitido anteriormente; á las que contestó el señor Ministro, refiriéndose á sus anteriores observaciones, é insistiendo en que no podia saberse todavia en qué forma serian dictados los códigos federales, y en que en ellos no podia desconocerse las soberanías de Provincia que reconocia la Constitucion.

El señor García: Que como el último período del artículo en discusion era una consecuencia necesaria del principio, á su juicio absorbente, de la concurrencia de la Justicia Federal, para no redundar en argumentos, escusaba aducir observaciones y se reduciría á votar en contra de ese artículo.

Puesto á votacion el artículo 15 fué aprobado por mayoría. Se hizo un cuarto intermedio.

Vueltos los señores Diputados á sus asientos, se puso en discusion el artículo 16; su tenor es el siguiente:

Art. 16. La Corte Suprema de Justicia conoce exclusivamente en las causas referentes á la conducta

ministerial de sus miembros, y de los de las Cortes de Distrito. Conoce tambien de las de sus empleados subalternos, á quienes nombra y remueve segun su reglamento interior.

El señor Garzon dijo: Desearia que el señor Diputado informante, se sirva esclarecer el sentido de este artículo, porque la Constitución dice en su artículo 41 que los miembros de la Suprema Corte pueden ser acusados por la Cámara de Diputados.

El señor Funes: Por el artículo 48 de la Constitución, se ve que el fallo que pronuncie el Senado sobre la acusacion entablada por la Cámara de Diputados, no puede tener mas efecto que la destitucion del acusado; pero la parte condenada, queda no obstante, sujeta á acusacion, juicio y castigo conforme á las leyes, ante los Tribunales Federales. Por consiguiente, como el artículo en discusion no se refiere al juicio político sino al que corresponde á los Tribunales ordinarios, despues de la destitucion del acusado, es claro que no se opone al artículo constitucional.

El señor Ministro de Justicia: El derecho de acusacion concedido á esta Honorable Cámara por la Constitución es solo para los casos muy graves, y no tiene otro objeto que la destitucion del acusado; pero esta, despues del juicio político puede merecer el juicio, y entonces se establece por esta ley que es la Suprema Corte quien conoce exclusivamente en las causas referentes á la conducta ministerial de sus miembros y de los de las Cortes de Distrito. Hay además otros casos en que no se trata de violacion de la Constitución, ni los delitos que se trata de castigar merecen pena infamante ó de muerte, como seria el caso de un Ministro de la Suprema Corte que no asistiese por un tiempo sin causa fundada, y tantos otros que no me ocurren ahora, y que no merecen la acusacion política; pero que, es necesario que la Suprema Corte conozca en juicio ordinario.

Puesto á votacion el artículo 16 fué aprobado por mayoría.

Se puso en discusion el artículo 17; su tenor es el siguiente:

Art. 17. Los fallos de la Suprema Corte de Justicia son irrevocables y sin apelacion. Ningun Poder Público Federal ni Provincial puede pretender derecho de revisar esos fallos ó oponerse á ellos, ni aun en los casos en que la Corte decidiese competencias con su propia jurisdiccion.

El señor García dijo: Cuando se discutió el artículo 16 propuse que se dividiese la Corte en dos Salas para juzgar en los asuntos que corresponden á su jurisdiccion originaria, á efecto de instituir mas garantías para los in-

dividuos; pero esa indicacion no fué aceptada. En este artículo se establece que los fallos de la Suprema Corte son irrevocables y sin apelacion: yo veo, señor, y hasta cierto punto conozco muy bien el objeto que se propone la Comision en este artículo, el de poner un dique á la capciosidad de los litigantes y acortar los pleitos. Pero no por eso debemos establecer que no haya recurso de ningun género en las causas en que la Suprema Corte conoce exclusiva y originariamente, porque aquella puede cometer un error ó incurrir en una injusticia. Debe, pues, modificarse este artículo en la forma siguiente: «Los fallos de la Suprema Corte de Justicia son irrevocables y sin apelacion. Pero en los casos en que conoce originariamente hay lugar á súplica, etc.» Deseo que se establezca en este artículo el recurso de súplica para esos casos, que son sin duda demasiado graves y de mucha trascendencia para que concluyan en una sola instancia, si se atiende á los resultados que puede producir esa ley.

El señor Funes: El sentido de este artículo solo es que la Suprema Corte es el Tribunal mas alto; pero no se excluye el recurso de súplica que siempre tiene lugar en la última instancia; pero no puede haber lugar á apelacion puesto que no hay un Tribunal superior á aquella.

El señor García: Convengo en que no se puede apelar á otro Tribunal de las sentencias de la Suprema Corte; pero como esta puede revocar sus sentencias cuando conozca que ha incurrido en una injusticia, no le debemos negar el derecho de enmendar sus fallos.

El señor Posse (D. Filemon): Propondria á la Comision que se suprima la palabra *sin apelacion*, porque siendo la Suprema Corte el Tribunal mas alto es claro que no puede haber apelacion, porque apelar es alzarse de un Tribunal inferior á otro superior. Creo, pues, que está demás esta palabra, ó por lo menos deseo que la Comision se sirva explicar por qué razon se ha consignado en el artículo.

El señor Ministro de Justicia: En efecto, los fallos de la Suprema Corte son irrevocables y sin apelacion; y el objeto de este artículo, es decir, lo que no estaba dicho todavia, que esos fallos no pueden ser enmendados ó revocados por ningun otro poder, ni pueden dejar de tener toda la eficacia que se requiere en un alto Tribunal que es superior á todos. Pero es necesario decir tambien que los fallos de la Suprema Corte son *sin apelacion* cuando se habla de sus atribuciones, porque esto es lo mismo que decir es el último Tribunal. Por estas razones no está demás consignar en el artículo la palabra que se quiere suprimir.

Se podria poner tambien que la Suprema Corte tiene el derecho de revisar sus fallos,

pero esta adición no puede hacerse en este artículo sino en otro lugar. Cuando la Suprema Corte crea que ha obrado equivocadamente, tendrá siempre el derecho de revisar sus fallos, porque no dice lo contrario el artículo y esa facultad es inherente á todos los altos Tribunales que conocemos, cuando creen que han juzgado mal. Creo, pues, que está bastante bien provisto este artículo y que la palabra *sin apelacion* complementa la idea de que la Suprema Corte es el mas alto Tribunal.

El señor Araoz: He de insistir en que se suprima en la 1ª parte de este artículo la palabra *sin apelacion*, porque la creo enteramente inútil desde que la Carta declara á la Suprema Corte el mas alto Tribunal, y nadie puede quitarle ese carácter. Me parecen suficientes las observaciones del señor Ministro para probar la indispensable necesidad de una palabra que yo creo enteramente inútil; porque antes de esta ley está la Constitución que declara á la Suprema Corte el mas alto Tribunal de Justicia de la Confederación.

El señor Garzon: Me parece que de conformidad á las observaciones hechas por el miembro informante y el señor Ministro podría modificarse este artículo, poniendo en sustitucion de su primera parte lo siguiente: «La Corte Suprema es el último Tribunal». Propongo esta modificacion, porque creo que se debe permitir la súplica del fallo de la Suprema Corte, desde que no debe haber un solo fallo en causas de tanta importancia como son las que pertenecen á su jurisdiccion originaria. Si la Honorable Cámara acepta esta modificacion, no habrá palabra *sin apelacion* ni es preciso decir que los fallos de la Suprema Corte son irrevocables, quedando esta, por consiguiente, en la libertad de revocar aquellos cuando conozca que ha obrado injustamente, porque esto, y no otra cosa, es lo que importa el recurso de súplica.

El señor Funes: No tiene fuerza la indicacion hecha por un señor Diputado que cree inútil la palabra *sin apelacion* en este artículo, porque la Constitución considera á la Suprema Corte como el mas alto Tribunal. Esa palabra, señor, puede ser una redundancia, si se quiere; pero una redundancia necesaria para la claridad de la ley.

El señor Posse (D. Filemon): Aunque no se consigne esa palabra en el artículo, no pue-

de haber apelacion desde que la Suprema Corte sea considerada como el último Tribunal. Por consiguiente, la palabra *sin apelacion* es un defecto en la redaccion de esta ley.

El señor Funes: He dicho antes que esa redundancia debe aceptarse porque da mas claridad á la ley, y lo que debe consultarse en toda ley es la claridad que no puede jamás ser un defecto en ella cuando no perjudica á su sentido.

El señor Ferreyra: Difiero por mi parte á la supresion de la palabra *sin apelacion*, si se cree redundante, y creo que el señor Ministro y los otros miembros de la Comision deferirán por su parte.

El señor Soria: Advierto, señor, una incoherencia muy notable en los que han hecho oposicion á la redaccion de este artículo, porque han defendido otras veces los artículos sancionados por el Honorable Senado oponiéndose con bastante calor al establecimiento de los nueve Jueces de la Suprema Corte que la Comision ha querido para que la Justicia estuviera bien desempeñada. Bien, pues, por esa misma razon es que se trata ahora de hacer irrevocables los fallos de la Suprema Corte, porque ahora como entonces queremos que la Justicia sea bien ejercida. Sin embargo, aceptaré por mi parte la modificacion propuesta por el señor Diputado Garzon; aunque bien pudiera decirse tambien *irrevocables y sin apelacion* que importan una sola cosa, y no dos como se ha querido dar á entender.

Dado el punto por suficientemente discutido se puso á votacion el artículo 17 y resultó la afirmativa por mayoría.

El señor Quesada: Hizo mocion para que se levantase la sesion fundándose en que por ser la hora avanzada no habia tiempo para ocuparse del artículo 18 y siguientes que contenian prescripciones de mucha gravedad, y debian ser considerados con detencion.

Habiendo sido suficientemente apoyada esta mocion, se procedió á votar sobre ella y resultó la afirmativa por unanimidad.

Acto continuo se levantó la sesion siendo las cuatro y cuarto de la tarde.

M. Luque.

Benjamin de Igarzabal,
Secretario.